



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2017-16514943-APN-DGAYF#MAD - RESOL JGM EMPORIO EL TANQUE

---

VISTO el Expediente N° EX-2017-16514943-APN-DGAYF#MAD del Registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la Ley N° 24.051, su Decreto Reglamentario N° 831 de fecha 23 de abril de 1993, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017), la Resolución N° 185 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE de fecha 15 de marzo de 1999 y,

**CONSIDERANDO:**

Que en el expediente citado en el Visto de la presente, tramita el recurso de reconsideración del artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017 interpuesto por la firma EL EMPORIO DEL TANQUE S.A. (CUIT N° 30-55648611-1) contra lo dispuesto en la Resolución RESOL-2017-358-APN-JGM de fecha 22 de septiembre de 2017 que desestimó el recurso jerárquico contra lo dispuesto en la Resolución N° 473 de fecha 17 de junio de 2015, de la ex SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, actual MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, que le impuso una multa de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000), por haber infringido los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 185/99 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Que mediante la Resolución N° RESOL-2017-327-APN-MAD de fecha 27 de junio de 2017 se rechazó el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por la sumariada.

Que la recurrente, debidamente notificada, hizo uso del derecho que le confiere el artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1.759/72 T.O.1991 que en su parte pertinente establece que las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, los Ministros o los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos recursos solo serán susceptibles de la reconsideración prevista en la norma citada.

Que la firma sumariada fundó sus agravios en la falta de proporcionalidad y razonabilidad entre la multa aplicada y el supuesto hecho cometido por ella, con vulneración del artículo 28 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la administrada manifestó que los diversos actos administrativos que rechazaron los recursos interpuestos no hacen mención concreta alguna a las normas en que supuestamente se basan para establecer los parámetros sancionatorios, por lo que los actos administrativos dictados carecen de los elementos causa y motivación, regulados por el artículo 7° de la Ley N° 19.549.

Que la administrada expresó que no se verifica explicación alguna sobre cómo se determinó el monto de la multa.

Que, por último, la sumariada solicitó la declaración de nulidad y se deje sin efecto la resolución que impuso la multa y para el supuesto de rechazo de la petición se revea el monto de la multa aplicada por constituir un exceso de punición y hallarse vulnerados los elementos causa y motivación.

Que procede mencionar que la Ley N° 24.051, en su artículo 49, prescribe que toda infracción a las disposiciones de esa ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad de aplicación con las sanciones que enuncia- las que podrán ser acumulativas- dentro de las cuales en el inciso b) se contempla la multa de –CINCO MIL PESOS (\$ 5.000) –CONVERTIBLES, Ley N° 23.928- hasta QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000).

Que asimismo el artículo 50 de la ley prevé que las sanciones enumeradas precedentemente, se aplicarán previo sumario que asegure el derecho de defensa y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado.

Que todo lo dicho tiene como base dejar asentado que la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES ha meritado dentro del principio de razonabilidad la multa aplicada, sin llegar a aplicar la multa de mayor envergadura prevista en la ley, ni tampoco el máximo previsto por la citada norma.

Que en relación a la sanción que cabe aplicar por la infracción comprobada, debe tenerse presente que si bien la autoridad administrativa actúa en ejercicio de facultades regladas en las que existe una norma antecedente que indica hacia dónde debe dirigirse la decisión administrativa, las distintas sanciones que podrían aplicarse abren un ámbito de discrecionalidad en el que el órgano de administración debe evaluar la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta del administrado, para optar de tal modo entre una u otra de las sanciones posibles.

Que teniendo en cuenta que la graduación de sanciones pertenece al ámbito de las facultades discrecionales de la administración, el límite a tal ejercicio debe estar dado por el principio de razonabilidad de la sanción que se aplica y que, a tal efecto, deben ponderarse diversas circunstancias atinentes al administrado, como ser la existencia de intencionalidad o reiteración en la conducta punible, o la naturaleza de los perjuicios causados, es decir, si se produjo una afectación o riesgo de afectación al objeto de tutela.

Que todos estos elementos han sido meritados en la determinación de la sanción, existiendo en el expediente numerosos informes técnicos fundados y firmados por las áreas técnicas que establecen con precisión los hechos relevados y probados en el procedimiento sancionatorio, como también las sucesivas intervenciones del Servicio Jurídico.

Que sin perjuicio de ello, cabe aclarar que en materia ambiental la razonabilidad administrativa tiene, en el ejercicio de una potestad administrativa, un margen de discrecionalidad no solo en la determinación del monto de la sanción, sino también en la realización de apreciaciones y juicios técnicos, que estará siempre amparado por el principio in dubio pro ambiente.

Que, en el informe técnico-jurídico final como en las resoluciones recurridas quedó ampliamente demostrada la naturaleza y entidad de la infracción, la gravedad del peligro creado, y la conducta del sumariado, todo ello, analizado a la luz de los mandatos establecidos en nuestra Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, de los que surge que la protección del ambiente es un verdadero mandato imperativo y operativo que obliga al Estado a abstenerse de contrariar el derecho subjetivo de los particulares de gozar de un ambiente protegido, pero también a realizar

efectivamente ese mandato de acción, dictando las leyes necesarias, protegiendo el ambiente de manera positiva en su accionar y obligando a los particulares a cumplir con su deber de proteger el ambiente.

Que el acto administrativo recurrido ha sido sustentado en hechos, antecedentes y derecho aplicable, y cumple con los procedimientos esenciales y sustanciales previstos en el ordenamiento jurídico y con la finalidad perseguida por la norma, esto es, la protección del bien jurídico “ambiente”.

Que con relación al “quantum” de la sanción la graduación de la misma, como se ha indicado, debe quedar librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación, siempre que no se traspasen las limitaciones que dimanen del ordenamiento jurídico, dado que la Administración tiene la facultad de sancionar teniendo en cuenta el principio constitucional de razonabilidad, que exige proporcionalidad entre la medida adoptada y los hechos que le sirven de causa.

Que en consecuencia, el recurso de reconsideración interpuesto por la firma sumariada debe desestimarse, en razón de que los argumentos que constituyen la causa de sus agravios, resultan desvirtuados por los fundamentos expresados en todas las resoluciones que han decidido la cuestión.

Que no se desprenden razones de ilegitimidad, oportunidad, mérito y conveniencia que conduzcan a revocar o modificar el acto impugnado.

Que mediante el dictamen IF-2018-00746213-APN-FDAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017.

Por ello,

**EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Recházase el recurso de reconsideración previsto en el artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1.759/72 T.O. 2017 interpuesto por la firma EL EMPORIO DEL TANQUE S.A. (CUIT N° 30-55648611-1) contra lo dispuesto en la Resolución RESOL-2017-358-APN-JGM de fecha 22 de septiembre de 2017 que desestimó el recurso jerárquico contra lo dispuesto en la Resolución N° 473 de fecha 17 de junio de 2015, de la ex SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, actual MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, que le impuso una multa de PESOS TREINTA MIL (\$ 30.000), por haber infringido los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 185 de fecha 15 de marzo de 1999 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

**ARTÍCULO 2º.-** Notifíquese a la recurrente el contenido de la presente.

**ARTÍCULO 3º.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

